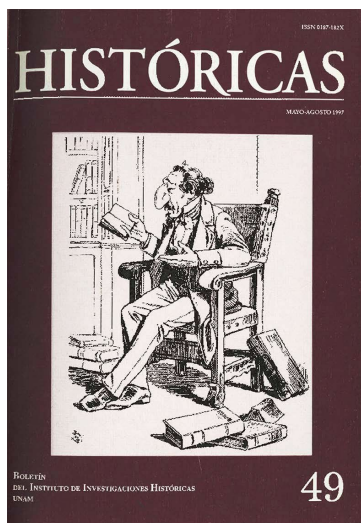




Artículo: Historia política

Autor(es): Loaeza, Soledad

Revista: Históricas. Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM

Número: 49

Año: 1997

ISSN edición impresa: 0187-182X

ISSN de pdf: [en trámite]

Forma sugerida de citar: Loaeza, Soledad. "Historia política" Históricas. Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 49 (1997): p. 18-30. Edición digital en PDF, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2018, Disponible en Repositorio Institucional Históricas UNAM <http://hdl.handle.net/20.500.12525/3891>

D.R. © 2018. Los derechos patrimoniales pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México

Entidad editora: Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Nacional Autónoma de México

Correo electrónico: departamento.editorial@historicas.unam.mx

"Excepto donde se indique lo contrario, esta obra está bajo una licencia Creative Commons (Atribución-No comercial-Compartir igual 4.0 Internacional, CC BY-NC-SA Internacional, <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es>)"



Para usos con otros fines se requiere autorización expresa de la institución: departamento.editorial@historicas.unam.mx

Con la licencia CC-BY-NC-SA usted es libre de:

- **Compartir:** copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
- **Adaptar:** remezclar, transformar y construir a partir del material.

Bajo los siguientes términos:

- **Atribución:** debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
- **No comercial:** usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
- **Compartir igual:** si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.



INSTITUTO
DE INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS



REPOSITORIO
INSTITUCIONAL
HISTÓRICAS
UNAM

En un ensayo publicado en 1974, el historiador francés Jacques Juilliard sostenía que la historiografía francesa contemporánea había registrado desarrollos novedosos. Recordaba que, sobre todo después de la segunda guerra mundial, la rica tradición del siglo XIX en esta materia se había visto sometida a la crítica despiadada de la Escuela de los Annales, que había descalificado la historia política porque —según los argumentos de sus seguidores— era historia psicológica que ignoraba los condicionamientos estructurales, era elitista, se concentraba en asuntos particulares y dejaba a un lado las causas generales, y era —sin saberlo— narrativa, poco analítica, ideológica y parcial. Concluía, sin misericordia, que esta historia de los acontecimientos (*événementielle*) ofrecía una imagen ingenua de la historia: la que reduce el origen de los fenómenos a sus causas aparentes.¹ Este enfoque sobre el pasado había sido desechado porque había convertido el conocimiento histórico en una serie de crónicas apologéticas de la sacralización del Estado y de la tradición republicana. Según Juilliard, estas limitaciones habían podido ser superadas desde los años sesenta gracias a la revaluación del fenómeno político que habían propiciado la sociología y la ciencia política. No eran pocos los historiadores que habían recurrido al instrumental analítico que ofrecía conceptos clave de la ciencia política, por ejemplo, elites, clase política, coalición de intereses, instituciones, cultura política, para reanimar el estudio del poder desde una perspectiva novedosa y reveladora.

En México, donde la historia política también sirvió durante décadas a objetivos políticos particulares y a la apología de la revolución y del arreglo institucional posrevolucionario, la relación entre historia y política ha seguido el curso inverso. El vigoroso desarrollo de la historiografía política del México contemporáneo ocurrido en los últimos veinticinco años, en buena medida

¹ Jacques Juilliard, "La politique", en Jacques Le Goff y Pierre Nora, *Faire de l'histoire. Nouvelles approches*, Paris, Editions Gallimard, 1974, p. 229-250. Ver también Guy Boudé y Hervé Martin, *Les écoles politiques*, Paris, Editions du Seuil, 1989.

animado por las visiones críticas de la experiencia mexicana que impusieron los acontecimientos de 1968, ha impulsado el progreso de la ciencia política que es hoy en día en México una de las disciplinas más vitales y prometedoras en el campo de las ciencias sociales. El esfuerzo de los historiadores ha aportado muchos elementos de trabajo para los politólogos, quienes nos hemos beneficiado porque gracias a los historiadores podemos identificar con mayor precisión los rasgos específicos del poder, así como la autonomía de lo político. En una mirada rápida a la lista de contribuyentes destacan los nombres de Daniel Cosío Villegas, Moisés González Navarro, Héctor Aguilar Camín, Álvaro Matute, Josefina Vázquez, Alicia Hernández, Javier Garcíadiego, Enrique Krauze, para mencionar sólo a algunos de los más distinguidos entre los mexicanos, así como Friedrich Katz, Francisco Xavier Guerra y Alan Knight, entre los extranjeros. Sus obras han desbrozado terreno de investigación y lanzado pistas llamativas para el análisis del poder. Los historiadores son en buena parte responsables del interés que priva en la comunidad mexicana de ciencias sociales por el conocimiento de un pasado libre de las verdades establecidas y de los lugares comunes que nos heredaron los exégetas de la revolución.

Por otra parte, la ciencia política puede contribuir a su vez a la profundización del conocimiento del México contemporáneo, porque sus conceptos y el instrumental analítico que le son propios permiten distinguir entre la historia y la memoria. Como lo advierte Pierre Nora, esta distinción es el único camino válido para proteger el pasado de las manipulaciones del poder, del peso de los mitos, de la labor de zapa de la memoria que extirpa “las peripecias de la historia hasta que oblitera las trayectorias prolongadas y difíciles, los virajes imprevistos. [Una labor] que alimenta la amenaza que permanentemente pende sobre el historiador de caer en el pecado capital del anacronismo”.² Una clara diferenciación entre historia y memoria parece el único fundamento posible para que el historiador mantenga la regla de oro de la distancia crítica respecto de su objeto de estudio.

La relación entre historia y política se discutirá a partir de tres preguntas: ¿Sirve la historia para hacer análisis político? ¿Sirve la historia para hacer política? ¿Sirve la política para hacer historia? De entrada la respuesta a cada una de estas preguntas es afirmativa. La historia sirve para analizar la política; la historia sirve para hacer política; y, por último, la política sirve para hacer historia.

² Pierre Nora, “L'historien devant de Gaulle”, en Institut Charles de Gaulle, *De Gaulle et son siècle. 1. Dans la mémoire des hommes et des peuples*, Paris, Plon, La Documentation Française, 1991, p.172-178, p.175.

Para los politólogos la importancia de la historia política estriba en que nos ha ayudado a identificar la naturaleza propia y diferenciada de los fenómenos del poder. Contrariamente a lo que afirmaban los historiadores de la Escuela de los Annales, como Marc Bloch y Lucien Febvre, la historia política no es únicamente un *reflejo* de la acción fundamental y de las estructuras económicas y sociales, un conjunto de acontecimientos parciales de corto plazo, que puede ser ignorado y descartado para privilegiar la fuerza explicativa de las continuidades.

La ciencia política, al igual que la historia política, se ocupa de las acciones y decisiones, individuales y colectivas, esto es, el comportamiento de los hombres del poder y de las sociedades en relación con el poder. La diferencia entre las dos disciplinas es que la primera no sitúa su tema a lo largo del tiempo, sino que lo mira a la luz de las condiciones que prevalecen en un momento determinado. Así, su perspectiva es distinta porque la explicación histórica mira estos asuntos a la luz del pasado; en cambio, la explicación politológica los analiza en relación con su presente y, en muchos casos, se empeña en hacer proyecciones al futuro. Esto no significa que el análisis político sea siempre y obligadamente coyuntural, porque uno de los factores centrales en todo proceso que culmina en una decisión es el peso de la continuidad —de la historia— sobre la coyuntura. Toca por igual al historiador y al politólogo distinguir el alcance de esas decisiones a partir de sus consecuencias: aquellas que inciden en el largo plazo de las que tienen un impacto pasajero. Por otra parte, gracias a la historia política, el politólogo puede ponderar la importancia de la coyuntura.

De lo anterior se desprende que una de las diferencias importantes entre la historia y la ciencia política reside en que mientras la primera se ocupa de las continuidades, la segunda privilegia el análisis de los momentos que marcan una diferencia, de los cortes, tal vez de las rupturas; este énfasis es congruente con la importancia de las coyunturas como el espacio temporal privilegiado de los análisis de la ciencia política. En México, sin embargo, esta diferencia no es tan clara porque uno de los temas favoritos de la historiografía política del México contemporáneo es la revolución. Desde esta perspectiva, es bastante lo que se ha avanzado en la comprensión del fenómeno revolucionario en México, pero todavía hay mucho por explorar: la constitución de los actores políticos de la

postrevolución, las formas de participación, la normalización posrevolucionaria; es decir, los mecanismos de estabilización de la vida política.

Por ejemplo, temas que en el pasado eran despreciados o vistos como irrelevantes, como es el caso de las elecciones, no han sido suficientemente analizados con el instrumental de la ciencia política, cuyo uso dará seguramente resultados sorprendentes en la explicación de la reconstrucción del poder después de 1920. La experiencia de estudio del Partido Acción Nacional puede servir para ilustrar el tipo de novedades que puede arrojar un análisis de esta naturaleza.

En los años ochenta el PAN registró un avance electoral sin precedentes en el norte del país. Los sociólogos explicaron este desarrollo a partir de la hipótesis de que la oposición política era una expresión de modernidad política, de ahí que se hubiera adquirido gran impulso en las zonas más avanzadas y ricas del país; sus análisis son muy sugerentes, pero no responden a la aparente contradicción que planteaba el hecho de que los grupos más modernos de la sociedad apoyaran a un partido de oposición conservadora. La dirigencia panista aceptó con entusiasmo la interpretación de los sociólogos porque la idea de que el PAN era el partido de los sectores modernos de la sociedad, lo modernizaba, sin que hubiera mediado mayor esfuerzo de su parte.



Pero, si en lugar de centrar sus análisis en el establecimiento de correlaciones entre nivel de escolaridad, urbanización, ingreso medio y estructura económica, los expertos en comportamiento electoral hubieran mirado hacia atrás se habrían topado con que los estados donde Acción Nacional había registrado un crecimiento más acelerado en esa década, algunos de los cuales gobierna hoy, son los mismos en los que se fundaron comités del partido desde el nacimiento de la organización en 1939: Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y a partir de 1958, Baja California. También son estados que han tenido candidatos a diputados en cada elección federal desde 1943, dato importante si tomamos en cuenta que hasta 1967 el PAN no lograba cubrir todos los distritos, y la votación que ha recibido el partido en cada uno de ellos desde entonces ha sido alta y constante. Desde esta perspectiva, Acción Nacional tiene una historia en los estados que gobierna. En cambio, en otras entidades, como Sonora y Sinaloa, el partido apareció hasta después de 1982, y en algunas más aún no establece una presencia real y sostenida. De lo anterior se desprende que la explicación del fortalecimiento de Acción Nacional en el norte no es tanto la modernidad, sino la tradicional presencia del partido en la región. A partir de esta constatación pueden pensarse que las perspectivas futuras del PAN están en aquellos estados donde el partido tiene una historia. De hecho, los cuatro estados que tienen historia de panismo, Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Jalisco, han mostrado un comportamiento electoral y político distinto al de entidades donde la aparición de Acción Nacional es más reciente; su sensibilidad a los cambios en las leyes electorales es menor, así como su vulnerabilidad a las crisis internas.

El estudio de las constelaciones de intereses puede servirnos para entender el surgimiento del PAN en Sonora y en Sinaloa, en los años ochenta. Si vamos más allá de la historia del partido mismo nos topamos con que ambos estados tienen en común el desarrollo de la agricultura y la ganadería, así como el intervencionismo estatal que apoyó la modernización de estas actividades y de la producción agrícola. Uno de los efectos importantes de este proceso de cambio fue la aparición de grandes agricultores y ganaderos ricos. Estos nuevos líderes regionales fueron los promotores del crecimiento del voto por Acción Nacional, que se registró en esos estados al iniciarse la década de los ochenta. En la coyuntura que creó la expropiación bancaria, estos dirigentes panistas establecieron una alianza con las clases medias urbanas que se habían desarrollado en la región para apoyar el ingreso a la política de empresarios que, como Adalberto Rosas en Sonora y Manuel J. Clouthier en Sinaloa, fueron blanco en

los años setenta de las afectaciones agrarias decretadas por el entonces presidente Echeverría, y que en 1982 perdieron totalmente la confianza en el sistema político.

Visto desde esta perspectiva el comportamiento electoral de Sonora y Sinaloa después de 1983, la movilización del voto rural favorable al PRI, el famoso "voto verde" que los críticos denunciaban como prueba de la manipulación de los campesinos por el partido oficial, cobra un significado diferente. Las victorias priístas en estos estados pueden explicarse por la relación entre el PRI y los campesinos, o pueden ser analizadas como la expresión auténtica de intereses de ejidatarios y asalariados, que son por naturaleza antagónicos a los de quienes se habían afiliado a Acción Nacional.

Los ejemplos arriba expuestos sirven para ilustrar el tipo de mutuo enriquecimiento que puede propiciar una relación de intercambio continuo entre los historiadores y los investigadores de ciencia política. El politólogo que no sabe historia corre el riesgo de elaborar hipótesis frágiles que, en apariencia, son demostrables con técnicas estadísticas relativamente complejas, pero se derrumban cuando son confrontadas con hechos que destruyen la fachada de una formalización extrema.

¿Sirve la historia para hacer política?

Antonio Gramsci decía que historia y política no nada más estaban estrechamente unidas sino que eran una y la misma cosa, porque en ambos casos la acción humana es el centro de su preocupación. La política es la capacidad para transformar una realidad, manipularla y hacer efectiva una decisión. Además, para Gramsci la relación entre historia y política era la misma que vincula a una decisión con sus consecuencias. Por estas razones, decía, todo político tiene que conocer la historia, pues, aun cuando lo político sea casi siempre efímero, no debe olvidar que sus decisiones pueden sobrevivirlo, que cuando menos las consecuencias de sus decisiones trascenderán su existencia física.

El conocimiento de la historia es uno de los sustentos de la reflexión que debe hacer todo político respecto del probable alcance de su acción pública, porque puede encontrar en el pasado analogías orientadoras. Pongamos ahora el ejemplo de las leyes migratorias estadounidenses y la discusión actual a

propósito de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos, que están forzados a regresar a México porque no son residentes legales y tampoco tienen permiso de trabajo. Durante la crisis económica de 1929, también volvieron muchos trabajadores mexicanos de Estados Unidos, donde los índices de desempleo y la caída de los precios de los productos agrícolas habían estrechado brutalmente la demanda de mano de obra barata en el campo. Según algunos, México resistió la presión del regreso de los trabajadores mexicanos gracias a la reforma agraria del presidente Cárdenas. Esta experiencia es un antecedente que debería contribuir a calcular las consecuencias de las nuevas leyes migratorias estadounidenses en México; no se trata de que haya una nueva reforma agraria, sino de contar con una referencia auxiliar para el diseño y la toma de decisiones.

Los congresistas estadounidenses, siempre tan reticentes a mirar la historia, tendrían que considerar que la migración mexicana no es un fenómeno reciente, sino que se trata de un flujo permanente, ininterrumpido, de intensidad variable cuya vitalidad no está determinada por decisiones gubernamentales y, ni siquiera, por el comportamiento de la economía mexicana, sino que es producto de una compleja maraña de causas, desde culturales y sociales hasta económicas. Raras veces las decisiones políticas son totalmente novedosas; la gran mayoría de ellas se nutre de las experiencias pasadas, pero en la vida cotidiana de los funcionarios públicos o de los representantes populares este proceso se mantiene implícito, está sumergido bajo el peso de la urgencia del día a día.

Estas experiencias previas son datos esenciales de la realidad que se imponen a la política, a veces con la misma fuerza que otros más palpables e inmediatos, como la población, la estructura de la economía y las formas de dominación social. Las decisiones de los sucesivos gobiernos también se constituyen a lo largo del tiempo en continuidades que deben ser tomadas en cuenta antes de diseñar una nueva decisión. Sin embargo, tal vez lo más importante del conocimiento del pasado para un político o para un funcionario sea el juego entre el corto y el largo plazos. De todas formas la historia enseña que la trascendencia de las decisiones del poder es difícil de prever.

En su libro sobre los orígenes del partido oficial, Luis Javier Garrido escribe que cuando se anunció la formación del Partido Nacional Revolucionario, en 1929, los periódicos no le dieron demasiada importancia y la noticia apareció perdida en la prensa, como si se tratara de una más de las muchas organizaciones efímeras que entonces aparecían para apoyar la carrera de políticos ambiciosos. Pocos imaginaban que el PNR se convertiría en una de las instituciones centrales

del siglo XX mexicano. En cambio, decisiones que fueron anunciadas como históricas no tuvieron ningún efecto y fueron olvidadas poco a poco hasta desaparecer por completo. Recordemos únicamente los muchos intentos que ha habido de formación de una gran central obrera que reuniera a sindicatos de empresas privadas y grandes sindicatos de industria, como el Bloque de Unidad Obrera de los años cincuenta que fracasó discretamente y sin haber tenido tampoco un efecto real.

La expropiación de la banca que decretó el presidente José López Portillo en septiembre de 1982 es otro ejemplo de decisiones fallidas, al menos en los términos propuestos por el presidente; fue la respuesta a una situación de emergencia, que buscó justificarse como si se tratara de un eslabón en la continuidad revolucionaria del Estado mexicano. Sin embargo, si la idea era emular la nacionalización petrolera que llevó a cabo el presidente Cárdenas en marzo de 1938, lo menos que puede decirse es que el autor de la decisión de 1982 mostró un profundo desconocimiento del proceso y las razones del presidente Cárdenas, así como del país que era México en 1982 y de lo que había ocurrido en los 25 años anteriores. Cuando se anunció la expropiación de la banca se habló mucho de un viraje histórico. Indiscutiblemente lo fue, pero no en el sentido en que lo sostenían sus defensores, no fue la profundización de la autonomía del Estado frente a sus adversarios los banqueros, sino que fue el punto de inflexión en el que el Estado de la posrevolución mexicana tuvo que iniciar una profunda transformación, uno de cuyos aspectos centrales fue precisamente la disminución de su presencia y de su acción tutelar sobre la sociedad.

Una de las primeras razones que explican el giro inesperado que tomó el Estado mexicano después de la expropiación de la banca es que, en 1982, esa decisión era ya, para cualquier estándar internacional, un anacronismo. La crisis del Estado benefactor y del intervencionismo estatal se había iniciado diez años antes, y el modelo de crecimiento del desarrollo estabilizador había empezado a ser revisado también con anterioridad.

Políticos e historiadores tendrían que reflexionar —y luego explicar— por qué una determinada decisión tiene alcance de largo plazo, mientras que los efectos de otra parecen simplemente desvanecerse. Cuando los políticos toman decisiones ¿saben cuáles pueden ser sus consecuencias? Evidentemente, no; es posible que algunos, los mejores, sean capaces de imaginar a grandes rasgos la dirección general que pueden tomar los acontecimientos, una vez que han tomado una decisión. Esta capacidad es la que puede ayudarnos a distinguir al

político del estadista. Con un rápido repaso de memoria, encontramos que eran historiadores algunos de los políticos con visión de Estado más distinguidos del siglo XX: Winston Churchill y Charles de Gaulle poseían una visión de largo plazo, que les permitía mirar más allá de la siguiente elección, por encima de los intereses de partido y de las relaciones personales, y llevaron a cabo proyectos que tuvieron un impacto duradero sobre las orientaciones de su tiempo y de su sociedad. Los logros de estos políticos no pueden desvincularse de sus interpretaciones del pasado que sirvieron para iluminar la imagen que tenía cada uno de sí mismo y del papel que le tocaba desempeñar en la vida de su país, cuando se presentara la oportunidad.

Una reflexión a propósito de los estadistas mexicanos del siglo XX trae a la mente de manera obligada el nombre de Jesús Reyes Heróles, quien como legislador y como funcionario del gobierno federal tuvo una influencia determinante en la construcción del sistema de partidos. La reconstrucción de la trayectoria de este proyecto nos conduce a Reyes Heróles, a su participación en la defensa de la reforma electoral de 1963 que creó las diputaciones de partido, uno de cuyos objetivos era darle oxígeno a partidos de oposición exánimes, que no encontraban apoyo electoral en una sociedad indiferente a los mecanismos de la democracia liberal. La calidad de estadista de Reyes Heróles se reveló desde entonces en el hecho de que veía la reforma como parte de un proyecto de largo plazo; era una primera etapa, de ahí que confiara en que sería una medida temporal. Pensaba que darle cabida a las minorías en la Cámara era una forma de estimular la participación electoral; según la ley, sólo tendrían diputaciones de este tipo los partidos que no hubieran obtenido cuando menos veinte curules de mayoría. Reyes Heróles confiaba en que, al aumentar el número de representantes de un partido en la Cámara, se iniciara un proceso virtuoso que concluyera en el aumento del caudal de votos por los partidos de oposición. De esta manera, al alcanzar suficiente número de diputaciones por mayoría, las diputaciones de partido dejarían de funcionar en forma automática.

El cálculo de Reyes Heróles fue equivocado, pues no fue sino hasta finales de los años ochenta cuando se redujo la tasa de abstencionismo, que era finalmente un objetivo de las leyes electorales al mismo tiempo que condición indispensable para el fortalecimiento de los partidos. Sin embargo, no desesperó y nunca abandonó su proyecto de promoción de un régimen plural de partidos, como parte de un esquema amplio de transformación del Estado posrevolucionario. De ahí que años más tarde, como presidente del Partido Revolucionario Institucional, participara también activamente en la reforma elec-

toral de 1973, que proporcionó tiempos gratuitos en la televisión y en el radio a los partidos de oposición; y luego, en 1977, como secretario de Gobernación, diseñó y promovió la *Ley Federal de Organizaciones, Partidos y Procedimientos Electorales* que fue la piedra de toque de la transformación del sistema político mexicano hacia un sistema pluripartidista y liberal del que habían desaparecido los controles a la participación independiente.

El caso de Jesús Reyes Heróles es relevante cuando se habla de la relación entre historia y política, porque él mismo conocía bien la historia de México en el siglo XIX e insistía repetidamente en que era indispensable que los políticos mexicanos supieran historia. Con motivo de su ingreso a la Academia Mexicana de la Historia en 1968, pronunció un discurso titulado *Historia y acción*, en el que presentó su visión de la historia como una continuidad que proviene del pasado y que llega al futuro, en un “perpetuo remontarse o aventurarse”.³ En este mismo documento afirma que sus acciones se nutrían en la historia, la cual debe ser también el punto de partida de todo diseño político que se quiera de largo plazo. Es cierto que también hemos tenido grandes estadistas que parecen haber estado movidos más por la intuición y por una vinculación casi carnal con el poder, que probablemente tenían escasos conocimientos de historia, como fue el caso de Miguel Alemán, cuyo proyecto de modernización del país trascendió su presencia en el poder por más de tres décadas.

La historia también ofrece la oportunidad de asomarse a la experiencia de otras sociedades, pues la referencia a lo que ocurre —o ha ocurrido— en otros países enriquece en forma significativa la comprensión del mundo inmediato. Asimismo, en este sentido, en México se ha vivido un cambio notable en los últimos diez años. En el pasado, los políticos —y muchos estudiosos— sostenían que bastaba volver la vista hacia la revolución mexicana para encontrar soluciones a los diferentes problemas que afrontaba el país. Había una gran resistencia a mirar explícita y abiertamente hacia el exterior; quien lo hacía corría el riesgo de ser acusado de querer copiar fórmulas extranjeras e imponerlas en México. Semejante acusación partía de una inexactitud: siempre ha habido fórmulas extranjeras en México. A manera de ejemplo, puede citarse el liberalismo, como una propuesta ideológica y de organización política y social de origen europeo que fue trasladada a este país por la elite política que se había propuesto modernizarlo a principios del siglo XIX.

³ Jesús Reyes Heróles, “La Historia y la Acción”, en Álvaro Matute, *La teoría de la historia en México*, México, Sepsetentas, 1974, p. 173-198, p. 174.

Uno de los efectos del nacionalismo de la revolución mexicana fue hacernos creer que el régimen de la posrevolución se había levantado con base en una suerte de autosuficiencia ideológica y política que hacía innecesario recurrir al exterior en busca de ideas o políticas, aun cuando el objetivo de modernización fuera el mismo en México y en otros países. Sin embargo, en los años ochenta salió a la luz un cambio de actitudes políticas en la opinión pública, el cual consistió en que por primera vez se reconoció —al menos implícitamente— que la revolución mexicana ya no tenía las soluciones para todos los problemas del país. Era válido, por consiguiente, mirar al exterior, hacia donde se habían presentado experiencias similares.

Primero vemos hacia América Latina, donde al derrumbarse las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay se restableció la vida democrática; después, volvimos los ojos a España. La transición española iniciada en la segunda mitad de los años setenta se convirtió en un modelo para muchos países que querían dismantelar estructuras autoritarias, pero eludiendo el conflicto social y el derramamiento de sangre. El atractivo más poderoso de la transición española era precisamente que había logrado cerrar el penoso capítulo de la dictadura franquista sin confrontaciones ni golpes de Estado. La transición española puede ser vista como una experiencia que se acoge a la tradición política del pactismo propia de los países mediterráneos y esencialmente antidemocrática, pues es un asunto de negociación entre elites, pero es una vía de acuerdo con reglas del juego aceptables para los actores políticos.

Por otra parte, esta experiencia política ha despertado el apetito de muchos jóvenes por conocer la historia de España en México; se trata de sacarla del rincón donde estuvo arrumbada por décadas. Aquí encontramos otra forma de relación entre la historia y la política: cuando un hecho político provoca nuevas curiosidades en el conocimiento histórico.

Pero la historia también pesa cuando hacemos política en el nivel más bajo, en sus formas más elementales. Por ejemplo, cuando vamos a votar es muy probable que en nuestro ánimo esté presente el temor a la violencia, a los costos de la confrontación, a una guerra civil como la que se prolongó en México durante al menos diez años, de 1910 a 1920. Sin embargo, la década siguiente fue también de inestabilidad política y de incertidumbre; entre 1930 y 1940 los mexicanos vivieron bajo la amenaza de la ruptura institucional, de un golpe militar que podía desencadenar la generalización de un nuevo conflicto armado. Treinta años de violencia están inscritos en la memoria y en la historia política mexicanas, como lo está el movimiento estudiantil de 1968 y el recuerdo de la

violencia estatal contra un sector inerte de la población. Es muy probable que la continuidad de varias décadas del PRI esté sustentada en estos recuerdos, quizá vagos e imprecisos, pero no menos efectivos, como quedó demostrado en la elección del 18 de agosto de 1994 cuando, bajo la sombra del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del asesinato del candidato del partido oficial a la presidencia de la república, se celebraron las elecciones más concurridas de la historia, en las que participaron más de cuarenta millones de mexicanos.

¿Sirve la política para hacer historia?

La política sirve para hacer historia nada más cuando estamos hablando de estadistas; pero, además, el potencial histórico de una determinada decisión escapa al control del responsable de tomarla, de suerte que su futuro depende mucho de la capacidad del responsable para entender y ponderar causas y posibles consecuencias.

En México hemos encontrado otra manera menos noble de hacer historia con la política, cuando hemos utilizado el civismo para reescribir la historia y para generar lealtades que cubrían mucho más que el patriotismo o los símbolos de la nacionalidad y se extendían de la patria a un partido político, de las instituciones nacionales a otras que no representaban a todos los mexicanos sino a una parte de ellos. Inclusive, la construcción del sentimiento de identidad nacional se confundió con la generación de actitudes ciudadanas. Al atar la historia de México al destino del partido oficial o a las motivaciones de gobernantes y políticos, incurrimos en el grave pecado de politización, y la consecuencia de ello ha sido que el descrédito de esos políticos y gobernantes haya también perjudicado la comprensión de nuestro pasado.

Esta confusión entre política, historia y civismo condujo a la perversión de la historia patria que es una historia distinta de la política, porque su objetivo no es conocer ni entender el fenómeno del poder, sino que se trata de transmitir a los niños una noción de continuidad que los involucre a ellos mismos como parte de una comunidad que se identifica por sus hechos y por sus valores. Por eso uno de los componentes inexcusables de toda historia patria son los mitos, las creencias generalizadas que combinan realidad y fantasía, que a menudo oscurecen la realidad, pero iluminan el sentido las más de las veces deliberadamente positivo que se busca imprimir en el estereotipo que sustenta el mito. El

estereotipo del héroe, del mártir que muere por la patria, es también un modelo, un referente a partir del cual el niño se sitúa en el tiempo, identifica cualidades y virtudes y se mide a sí mismo.

La politización de la historia en México produjo la contaminación de la historia patria, que sufrió no únicamente la influencia de la visión partidista del pasado mexicano, sino también de los debates historiográficos que están, como es natural, fuera del alcance de los niños a los que hay que enseñarles historia patria. Ahora que las identidades tradicionales están amenazadas por el fenómeno de la globalización, la dilución de las fronteras y la rápida transformación de las culturas nacionales es urgente reconsiderar la importancia de la historia para la formación del niño, aunque sea sólo para afianzarlo firmemente en la cultura mexicana del siglo XX, en la que ha nacido. Ahora bien, esa cultura no es producto nada más de los políticos, de los rebeldes y de los revolucionarios, sino que también ha sido construida por los gobernantes y los profesionistas —los maestros, los médicos, los astrónomos, los físicos, los ingenieros, los matemáticos, los músicos, los escritores, los poetas, los pintores— que definieron los perfiles que nos son específicos en la actualidad.

¿En México la política ha sido autoritaria y antidemocrática porque el país está abrumado por su historia? Algunos han dicho, y otros más han sugerido, que la historia ha sido un obstáculo para la política. Sin embargo, la historia de un país es como sus minas, debe ser una fuente de riqueza, pero caminarla a ciegas supone grandes riesgos, sobre todo para quienes han sucumbido a la ambición de dirigir esa historia.